

1.12. DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-8)

—

1.12. DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp.)

ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Sumario: 1. Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 1.1. La catalogación de especies. 1.2. El régimen jurídico aplicable a las especies. 2. Regulación de la gestión de las Reservas de la Biosfera.

1. Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas

El Boletín Oficial de Canarias de 9 de junio de 2010 publica la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Esta consta de una exposición de motivos, ocho artículos y tres disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y una final, así como de seis anexos.

Según la exposición de motivos, la preservación de la biodiversidad es un objetivo fundamental de todas las políticas relacionadas con un desarrollo más sostenible en cualquier sociedad moderna, finalidad para la que es preciso contar con una ley específica en la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que se trata de una comunidad “donde la biota ha evolucionado aislada y, en consecuencia, se han formado numerosísimos endemismos, superando la cifra de 3.600 especies y 600 subespecies, entre plantas, algas, hongos y animales”.

Después de referir el marco normativo estatal —integrado por el artículo 45.2 de la Constitución y por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB), que contiene la parte sustancial de la legislación de carácter básico—, el contexto normativo de la Unión Europea —directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE— y los antecedentes de la regulación autonómica de Canarias, la exposición indica que la Comunidad de Canarias ha carecido hasta ahora de un cuerpo legal actualizado que enmarque y dé coherencia a todo ese conjunto normativo, de tal manera que destaca que este es, precisamente, el objetivo que se pretende: “La presente ley viene a cumplir esa función, integrando los criterios necesarios para adaptar la legislación canaria sobre protección de especies a las exigencias de la legislación básica estatal y de la normativa comunitaria”.

El artículo 1 establece la creación del Catálogo Canario de Especies Protegidas, en los términos del artículo 55.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, ambos como registros públicos de carácter administrativo.

El artículo 2 se dedica a definir conceptos empleados por la Ley.

En el 3, se fija la clasificación de las especies protegidas en tres categorías:

- “Amenazadas”, que, a su vez, se clasifican en especies “en peligro de extinción” y especies “vulnerables”.
- “De interés para los ecosistemas canarios”, que se definen como las merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000.
- “De protección especial”, que son aquellas que, sin reunir ninguna de las características definitorias de las categorías anteriores, “sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad o rareza”. El mismo artículo 3 determina los efectos de la inclusión de especies en el Catálogo Canario en función de las categorías referidas.

El artículo 4 regula el procedimiento para modificar el Catálogo.

Los artículos 5, 6 y 7 establecen los criterios para catalogar las especies, subespecies o poblaciones respecto de cada una de las tres categorías antes referidas.

El artículo 8 regula el régimen de infracciones y de sanciones.

Finalmente, junto a las disposiciones adicionales y transitorias se incluyen varios anexos, en los que se relacionan las especies “en peligro de extinción” (I), las “vulnerables” (II), las “de interés para los ecosistemas canarios” (III) y las “de protección especial” (IV); se determinan (Anexo V) las categorías supletorias para las especies afectadas por una modificación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas que suponga disminuir su protección, y, finalmente, se identifican (Anexo VI) las especies a las que es de aplicación el apartado 4 de la disposición transitoria.

En relación con esta ley se han suscitado diversas cuestiones relativas a su posible inconstitucionalidad, que se exponen a continuación.

1.1. La catalogación de especies

El primer punto que suscita dudas sobre la adecuación de la Ley canaria a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es el relativo a la catalogación de determinadas especies.

Para analizar esta cuestión, debe partirse de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en diversas sentencias ha establecido que las normas aprobadas por el Estado en relación con la protección de determinadas especies tienen el carácter de normativa básica, y, por consiguiente, las comunidades autónomas pueden incrementar dicha protección, pero no rebajarla.

En este sentido, la propia Ley 42/2007 dispone en su artículo 55.3 lo siguiente: “Las Comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies amenazadas, estableciendo, además de las categorías relacionadas en este artículo, otras específicas, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación”, y añade su apartado 4: “Las Comunidades autónomas podrán, en su caso, incrementar el grado de protección de las especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas en sus catálogos autonómicos, incluyéndolas en una categoría superior de amenaza”.

En desarrollo de estos preceptos, la Ley canaria establece en su artículo 1: “En los términos del apartado 3º del artículo 55 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se crea el Catálogo Canario de Especies Protegidas como un registro público de carácter administrativo que incluirá, cuando exista información técnica que así lo aconseje, las especies, subespecies o poblaciones de la biodiversidad amenazada o de interés para los ecosistemas canarios, incluyéndolas en alguna de las categorías que se determinan en el artículo 3 de la presente ley. A tales efectos, el Catálogo quedará ordenado en cuatro secciones, una por cada una de las categorías reguladas en dicho precepto”.

Con todo, el verdadero problema sobre la constitucionalidad de la Ley canaria se plantea en relación con su Anexo V, que incluye una lista de especies con una categoría menor de protección tanto respecto del catálogo en vigor como del nuevo catálogo que, en desarrollo de la Ley 42/2007, está actualmente tramitando el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En efecto, el apartado 5 de la disposición transitoria de la Ley, por remisión al Anexo V, fija categorías supletorias de protección aplicables al Catálogo Canario para el caso de que las vigentes en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas fuesen revisadas o reducidas respecto del catálogo actualmente en vigor.

En concreto, lo que se cuestiona es la posibilidad de que una especie considerada, en el catálogo español vigente, en la categoría de “en peligro de extinción”, al ser revisada esta catalogación en el nuevo catálogo estatal, pase a tener, en la Comunidad Autónoma de Canarias, una protección inferior, lo cual ocurriría, de hecho, con 18 especies para las que se fija en el Anexo V una categoría supletoria inferior a la inmediata en el régimen del Estado, que es la de “vulnerable”.

Ahora bien, para valorar la vulneración de la Ley estatal por parte de la Ley canaria, hay que tener en cuenta dos elementos:

a) En primer lugar, la propia disposición transitoria de la Ley —que regula los efectos del Anexo V cuestionado— establece que las especies contenidas en éste “mantendrán la categoría prevista en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas”, de tal manera que, si a causa de la modificación del catálogo su categoría de protección se redujera, sólo entonces se aplicaría la categoría subsidiaria, de forma que, en tal caso, en el Catálogo Canario tendrían la indicada en el citado anexo.

b) En segundo término, el artículo 3, al definir las diferentes categorías de “especies amenazadas” del Catálogo Canario, dispone —tanto en relación con las especies “en peligro de extinción” como en relación con las especies “vulnerables”— que se incluirán en dichas categorías, “aparte de aquellas con presencia significativa en Canarias y así calificadas por el Catálogo Español de Especies Amenazadas”, las que se incorporen de acuerdo con lo previsto en la presente ley o figuren en sus anexos I y II. Así, están incluidas en el Catálogo Canario todas las especies amenazadas que lo estén en el catálogo nacional.

Por todo ello, y sin perjuicio de la imperfecta técnica legislativa que supone aprobar una ley que tiene efectos meramente preventivos, lo cierto es que de la Ley se deduce que las categorías contenidas en el Anexo V de la Ley canaria tienen una aplicación exclusivamente subsidiaria, esto es, sólo se aplicará la categoría contenida en el anexo si

la modificación del Catálogo Nacional conlleva una protección inferior. En definitiva, la aplicación de la disposición transitoria en relación con las especies del Anexo V no comporta realmente una rebaja de la categoría de especies protegidas en el catálogo estatal, ni en el vigente ni en el que se encuentra en tramitación, por lo que no se produce vulneración alguna de la normativa básica estatal.

1.2. El régimen jurídico aplicable a las especies

El otro punto cuestionado se refiere al artículo 3, que establece en su apartado 2 los efectos que implica la inclusión de especies en alguna de las categorías del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Pues bien, las dudas sobre su adecuación a la normativa estatal se plantean en relación con la categoría de “protección especial” (3.2.c), respecto de la que se dispone la evaluación periódica de su estado de conservación, así como se hacen aplicables las prohibiciones que, para esta misma categoría, establece la legislación estatal (artículo 54.1 de la LPNB), lo cual es totalmente correcto. Sin embargo, a continuación se añade: “sin perjuicio de que en los supuestos de actuaciones promovidas por razones de interés público y prioritario, en el procedimiento de evaluación ambiental, el órgano ambiental determine la idoneidad de la traslocación o cualquier otra medida correctora o compensatoria fundamentada en los informes técnicos oportunos”.

El problema estriba en la contradicción existente entre esta previsión y lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en lo referido a las especies protegidas por la Directiva Hábitats. En este sentido, conviene recordar que dicho precepto dispone:

“Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá declararse para cada supuesto concreto:

- a) Mediante una ley.
- b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público.

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación ambiental.

Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la Comisión Europea”.

Efectivamente, parece que dicha contradicción existe, ya que ni se hace referencia a las causas imperiosas de interés general, ni se da cumplimiento a los trámites precisos para su aplicación, de forma que se convierte en una alternativa a lo dispuesto en la Ley estatal al configurar un supuesto en términos abiertos e indeterminados que está lejos de asegurar el respeto a las normas básicas del Estado: el precepto autoriza cualquier medida correctora o compensatoria mediante la apreciación de “razones de interés público y prioritario” por parte del “órgano ambiental” con el solo apoyo de “informes técnicos oportunos”.

2. Regulación de la gestión de las Reservas de la Biosfera

El Decreto 103/2010, de 29 de julio, regula determinados aspectos de la gestión y administración de las Reservas de la Biosfera en Canarias, y crea la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y el Consejo de Coordinación de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, cuyo reglamento de organización y funcionamiento también aprueba.

Este decreto tiene como finalidad reforzar el vínculo existente entre las distintas Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Canarias, para contribuir a mejorar el desarrollo y la cooperación entre ellas a fin de lograr maximizar la consecución de sus objetivos.

Para lograrlo se establece que cada Reserva de la Biosfera contará con un órgano gestor responsable del desarrollo de las estrategias, las líneas de acción y los programas, en el que estarán representados la Administración autonómica, la insular y la municipal del territorio en el que se extiende la reserva, así como los sectores económicos y sociales locales afectados por la existencia de ésta. Además, se establece que los reglamentos de cada uno de dichos órganos tendrán un contenido común, por lo que deben contemplar las estrategias específicas para el logro de los objetivos de la reserva y su correspondiente programa de gestión, así como el sistema de indicadores que permita valorar el grado de cumplimiento de los objetivos del programa *Man and the Biosphere* (MaB).

Además, para lograr tal objetivo, el Decreto crea la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, que comprende la totalidad de las reservas declaradas en Canarias y es considerada como nodo de innovación, de aporte de nuevas ideas y proyectos, de aprovechamiento de sinergias en los distintos ámbitos competenciales y de cooperación para la promoción de proyectos de interés mutuo, actuando como un vector de utilidad pública para la promoción y mejora permanente de las estrategias de sostenibilidad en el conjunto de áreas declaradas Reservas de la Biosfera por la UNESCO.

Por último se crea, como órgano colegiado de asesoramiento, coordinación y representación de las Reservas de la Biosfera, el Consejo de Coordinación de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, que es el responsable de impulsar y propiciar el funcionamiento de las Reservas de la Biosfera de Canarias, y está orientado al desarrollo sostenible y al respeto a los valores medioambientales, socioculturales e identitarios.

Sumari: 1. Llei 4/2010, de 4 de juny, del Catàleg canari d'espècies protegides. 1.1. La catalogació d'espècies. 1.2. El règim jurídic aplicable a les espècies. 2. Regulació de la gestió de les reserva de la biosfera.

1. Llei 4/2010, de 4 de juny, del Catàleg canari d'espècies protegides

El *Boletín Oficial de Canarias* de 9 de juny de 2010 publica la Llei 4/2010, de 4 de juny, del Catàleg canari d'espècies protegides, que consta de l'exposició de motius, vuit articles, tres disposicions addicionals, una de transitòria, una de derogatòria i una final, i sis annexos.

Segons l'exposició de motius, la preservació de la biodiversitat és l'objectiu fonamental de totes les polítiques relacionades amb un desenvolupament més sostenible en qualsevol societat moderna, finalitat per a la qual a la Comunitat Autònoma de Canàries cal tenir una llei específica, ja que es tracta d'una comunitat *“donde la biota ha evolucionado aislada y, en consecuencia, se han formado numerosísimos endemismos, superando la cifra de 3.600 especies y 600 subespecies, entre plantas, algas, hongos y animales”*.

Després de referir el marc normatiu estatal, integrat per l'article 45.2 de la Constitució i per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat (LPNB), que conté la part substancial de la legislació de caràcter bàsic, en el context normatiu de la Unió Europea —directives 79/409/CEE i 92/43/CEE—, i els antecedents de la regulació autonòmica de Canàries, indica que la Comunitat de Canàries fins ara no ha tingut cap cos legal actualitzat que emmarqui tot aquest conjunt normatiu i que hi doni coherència, de manera que destaca que aquest és, precisament, l'objectiu que es pretén: *“La presente ley viene a cumplir esa función, integrando los criterios necesarios para adaptar la legislación canaria sobre protección de especies a las exigencias de la legislación básica estatal y de la normativa comunitaria”*.

L'article 1 estableix la creació del Catàleg canari d'espècies protegides, en els termes de l'article 55.3 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat i del Banc de Dades de Biodiversitat de Canàries, ambdós com a registres públics de caràcter administratiu.

L'article 2 es dedica a definir conceptes que empra la llei.

En el 3, es classifiquen les espècies protegides en tres categories:

- “*Amenazadas*”, que, al seu torn, es classifiquen en espècies “en peligro de extinción” i espècies “vulnerables”.
- “*De interés para los ecosistemas canarios*”, que es defineixen com les que mereixen atenció particular per la seva importància ecològica en espais de la Xarxa Canària d’Espais Naturals Protegits o de la Xarxa Natura 2000.
- “*De protección especial*”, que són les que, sense reunir cap de les característiques definitòries de les categories anteriors, “*sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad o rareza*”. El mateix article 3 determina els efectes de la inclusió d’espècies en el Catàleg canari en funció de les categories referides.

L’article 4 regula el procediment per modificar el Catàleg.

Els articles 5, 6 i 7 estableixen els criteris per catalogar les espècies, subespècies o poblacions respecte de cadascuna de les tres categories abans referides.

L’article 8 regula el règim d’infraccions i de sancions.

Finalment, al costat de les disposicions addicionals i transitòries s’inclouen diversos annexos, en els quals es llisten les espècies “*en peligro de extinción*” (I), les “*vulnerables*” (II), les “*de interés para los ecosistemas canarios*” (III) i les “*de protección especial*” (IV); es determinen (annex V) les categories supletòries per a les espècies afectades en el cas que es decideixi una modificació del Catàleg nacional d’espècies amenaçades que suposi disminuir-ne la protecció, i, finalment, s’identifiquen (annex VI) les espècies a què és aplicable l’apartat 4 de la disposició transitòria.

Pel que fa a aquesta llei, s’han suscitat diverses qüestions relacionades amb la possible inconstitucionalitat, que s’exposen a continuació.

1.1. La catalogació d’espècies

El primer punt que suscita dubtes sobre l’adequació de la llei canària a la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, és el relatiu a la

catalogació de determinades espècies.

Per analitzar aquesta qüestió, hem de partir de la jurisprudència mateixa del Tribunal Constitucional que, en diverses sentències, ha establert que les normes aprovades per l'Estat amb relació a la protecció de determinades espècies tenen el caràcter de normativa bàsica i, per tant, les comunitats autònomes poden incrementar la protecció, però no rebaixar-la.

En aquest sentit, la mateixa Llei 42/2007 disposa en l'article 55.3 que *“Las Comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies amenazadas, estableciendo, además de las categorías relacionadas en este artículo, otras específicas, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación”*, i afegeix a l'apartat 4: *“Las Comunidades autónomas podrán, en su caso, incrementar el grado de protección de las especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas en sus catálogos autonómicos, incluyéndolas en una categoría superior de amenaza”*.

En desplegament d'aquests preceptes, la llei canària estableix en l'article 1 que *“1. En los términos del apartado 3º del artículo 55 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se crea el Catálogo Canario de Especies Protegidas como un registro público de carácter administrativo que incluirá, cuando exista información técnica que así lo aconseje, las especies, subespecies o poblaciones de la biodiversidad amenazada o de interés para los ecosistemas canarios, incluyéndolas en alguna de las categorías que se determinan en el artículo 3 de la presente ley. A tales efectos, el Catálogo quedará ordenado en cuatro secciones, una por cada una de las categorías reguladas en dicho precepto”*.

Amb tot, el veritable problema sobre la constitucionalitat de la llei canària es planteja en relació amb l'annex V, que inclou un llistat d'espècies que conté una categoria menor de protecció respecte tant del catàleg en vigor com del nou catàleg que, en desplegament de la Llei 42/2007, el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí té en tramitació.

En efecte, l'apartat 5 de la disposició transitòria de la llei per remissió a l'annex V fixa categories supletòries de protecció aplicables al Catàleg canari si les vigents en el Catàleg nacional d'espècies amenaçades es revisessin o es reduïessin respecte del catàleg

actualment en vigor.

En concret, el que es qüestiona és la possibilitat que una espècie considerada, en el catàleg espanyol vigent, en la categoria de “*en peligro de extinción*”, i que vegi revisada aquesta catalogació en el nou catàleg estatal, passi a tenir, a la Comunitat Autònoma de Canàries, menys protecció, la qual cosa, de fet, ocorreria respecte de divuit espècies per a les quals l’annex V fixa una categoria supletòria inferior a la immediata en el règim de l’Estat que és la de “*vulnerable*”.

Ara bé, per valorar la vulneració de la llei estatal per part de la llei canària, cal tenir en compte dos elements.

a) D’una banda, la mateixa disposició transitòria de la llei, que regula els efectes de l’annex V qüestionat, disposa que les espècies que inclou “*mantendrán la categoría prevista en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas*”, de tal manera que només si per motius de modificació la categoria de protecció es reduís, només llavors, s’aplicaria la categoria subsidiària, de manera que, en aquest cas, en el Catàleg canari tindrien la que indica l’annex esmentat.

b) A més a més, en segon terme, cal tenir en compte que l’article 3, en definir les diferents categories d’“*Especies Amenazadas*” del catàleg canari, disposa, pel que fa tant a les espècies “*en peligro de extinción*” com a les espècies “*vulnerables*”, que s’han d’incloure en aquestes categories, “*aparte de aquellas con presencia significativa en Canarias y así calificadas por el Catálogo Español de Especies Amenazadas*”, les que s’incorporin d’acord amb el que preveu aquesta llei o les que figurin en els annexos I i II. Això és, estan incloses en el Catàleg canari totes les espècies amenaçades que contingui el catàleg nacional.

Per això, i sense perjudici de la imperfecta tècnica legislativa que suposa aprovar una llei que té efectes merament preventius, el cert és que de la llei se’n dedueix que les categories incloses en l’annex V de la llei canària té una aplicació exclusivament subsidiària, això és, només s’ha d’aplicar la categoria que conté si la modificació del Catàleg nacional comporta menys protecció. En definitiva, l’aplicació de la disposició transitòria amb relació a les espècies de l’annex V no rebaixa realment la categoria d’espècies protegides en el catàleg estatal, ni en el vigent ni en el que es troba en

tramitació, per la qual cosa no es vulnera gens la normativa bàsica estatal.

1.2. El règim jurídic aplicable a les espècies

L'altre punt qüestionat es refereix a l'article 3, que estableix en l'apartat 2 els efectes que implica incloure espècies en alguna d'aquestes categories del Catàleg canari d'espècies protegides. Doncs bé, els dubtes sobre l'adequació a la normativa estatal es plantegen en relació amb la categoria de "*protección especial*" (3.2.c), respecte de la qual es disposa l'avaluació periòdica del seu estat de conservació, i es fan aplicables les prohibicions que, per a aquesta mateixa categoria, estableix la legislació estatal (article 54.1 de la LPNB), la qual cosa és totalment correcta. No obstant això, a continuació s'hi afegeix: "*sin perjuicio de que en los supuestos de actuaciones promovidas por razones de interés público y prioritario, en el procedimiento de evaluación ambiental, el órgano ambiental determine la idoneidad de la traslocación o cualquier otra medida correctora o compensatoria fundamentada en los informes técnicos oportunos*".

El problema consisteix en la contradicció entre aquesta previsió i el que disposa l'article 45 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, pel que fa a les espècies protegides per la directiva sobre hàbitats. En aquest sentit, convé recordar el que disposa aquest precepte:

“Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá declararse para cada supuesto concreto:

a) Mediante una ley.

b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público.

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso,

durante el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación ambiental.

Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la Comisión Europea”.

Efectivament, sembla que aquesta contradicció existeix, ja que ni es fa referència a les causes imperioses d'interès general, ni es compleixen els tràmits precisos per a la seva aplicació, per la qual cosa es constitueix en una alternativa al que disposa la llei estatal, en configurar un supòsit en termes oberts i indeterminats que està lluny d'assegurar el respecte a les normes bàsiques de l'Estat: el precepte autoritza qualsevol mesura correctora o compensatòria mitjançant l'apreciació de “razones de interés público y prioritario” per part del “órgano ambiental” només amb el suport d’“informes técnicos oportunos”.

2. Regulació de la gestió de les reserves de la biosfera

El Decret 103/2010, de 29 de juliol, regula determinats aspectes de la gestió i de l'administració de les reserves de la biosfera a Canàries, crea la Xarxa Canària de Reserves de la Biosfera, i el Consell de Coordinació de la Xarxa Canària de Reserves de la Biosfera i s'aprova el Reglament d'organització i de funcionament.

Aquest decret té com a finalitat reforçar el vincle existent entre les diferents reserves de la biosfera de la Comunitat Autònoma de Canàries, i contribueix a millorar el desenvolupament i la cooperació entre si per aconseguir maximitzar-ne la consecució dels objectius.

Per aconseguir-ho, s'estableix que cada reserva de la biosfera ha de tenir un òrgan gestor responsable de dur a terme estratègies, línies d'acció i programes, i en el qual han d'estar representades l'Administració autonòmica, la insular i la municipal del territori on s'estengui cada reserva de la biosfera, així com els sectors econòmics i socials locals afectats per l'existència de la reserva. A més a més, s'estableix que el Reglament de cada òrgan ha de tenir contingut comú, i ha de preveure estratègies específiques per a l'èxit dels objectius de la reserva, el corresponent programa de gestió, i el sistema d'indicadors

que permeti valorar el grau de compliment dels objectius del programa *Man and the Biosphere* (MaB).

A més a més, per aconseguir l'objectiu, el decret crea la Xarxa Canària de Reserves de la Biosfera, que comprèn totes les reserves declarades a Canàries, i entesa com a node d'innovació, d'aportació de noves idees i projectes, d'aprofitament de sinergies en els diferents àmbits competencials i cooperació per a la promoció de projectes d'interès mutu, que actua com un vector d'utilitat pública per a la promoció i la millora permanent de les estratègies de sostenibilitat en el conjunt d'àrees declarades reserves de la biosfera per la UNESCO.

Finalment, es crea el Consell de Coordinació de la Xarxa Canària de Reserves de la Biosfera com a òrgan col·legiat d'assessorament, de coordinació i de representació de les reserves de la biosfera, responsable d'impulsar i de propiciar el funcionament de les reserves de la biosfera de Canàries, orientat al desenvolupament sostenible i respecte als valors mediambientals, socioculturals i identitaris.